Asunto T-472/93

Campo Ebro Industrial, S. A., y otros contra Consejo de la Unión Europea

«Recurso de anulación — Reglamento — Ajuste del precio del azúcar en España al precio común — Falta de compensación para los productores de isoglucosa — Admisibilidad — Recurso de indemnización — Acto normativo que implica decisiones de política económica»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 21 de febrero de 1995 II - 424

Sumario de la sentencia

- 1. Recurso de anulación — Personas físicas o jurídicas — Actos que les afectan directa e individualmente — Reglamento que ajusta por anticipado los precios del azúcar aplicables en España a los precios comunes
(Tratado CE, arts. 173, párr. 4, y 189; Reglamento n° 3814/92 del Consejo)*
- 2. Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Acto normativo que implica decisiones de política económica — Violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica de rango superior destinada a proteger a los particulares
(Tratado CE, art. 215, párr. 2)*

3. *Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Acto normativo que implica decisiones de política económica — Violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica de rango superior destinada a proteger a los particulares — Ajuste anticipado de los precios del azúcar aplicables en España a los precios comunes — Falta de compensación para los productores de isoglucosa — Principios de confianza legítima y de no discriminación — Violación — Inexistencia — Falta de responsabilidad*

(*Tratado CE, arts. 40, ap. 3, párr. 2, y 215, párr. 2; Acta de Adhesión de 1985, art. 70, ap. 3; Reglamento n° 3814/92 del Consejo*)

1. Procede declarar la inadmisibilidad del recurso de anulación interpuesto por los productores españoles de isoglucosa contra el Reglamento n° 3814/92, que ajusta anticipadamente el precio del azúcar aplicable en España al precio común, concede ayudas a los productores de remolacha y de caña de azúcar y a los productores de azúcar para el azúcar almacenado, y autoriza a España a conceder una ayuda de adaptación a las empresas productoras de azúcar.

Por otra parte, no puede considerarse que la situación pretendidamente desfavorable en materia de competencia alegada por las demandantes, originada por el hecho de que, al contrario de los productores de azúcar españoles, no han recibido una compensación con motivo del ajuste anticipado de los precios que dispone el Reglamento, dé lugar a circunstancias específicas que justifiquen que dispongan de un derecho a recurrir en vía jurisdiccional, puesto que el legislador comunitario ha realizado una opción de política económica a la vista de la situación específica de los productores de azúcar, diferente de la suya.

En efecto, por una parte, este Reglamento establece unas medidas de alcance general que se aplican a situaciones determinadas objetivamente y tienen efectos jurídicos respecto de una categoría de operadores considerada de modo general y abstracto, los productores del sector del azúcar, y, suponiendo que, aunque no los mencione, afecta a los productores españoles de isoglucosa que operaban en el momento de su adopción, sólo sería en su condición objetiva de productores de isoglucosa, del mismo modo que a cualquier otro operador económico del mismo sector de la economía que se encontrara, real o potencialmente, en una situación idéntica.

Finalmente, la circunstancia de que un acto de carácter objetivo pueda tener efectos concretos diferentes para las diversas categorías de operadores no contradice su carácter reglamentario.

2. La Comunidad únicamente incurre en responsabilidad extracontractual por los daños causados por los actos normativos adoptados por sus Instituciones si se produce una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica de rango superior destinada a proteger a los particulares. En un contexto normativo carac-

terizado por el ejercicio de una amplia facultad de apreciación, indispensable para la ejecución de la Política Agrícola Común, tan sólo puede generarse la responsabilidad de la Comunidad si la Institución de que se trate rebasa, de un modo manifiesto y grave, los límites impuestos al ejercicio de sus facultades.

3. El Reglamento n° 3814/92, que ajusta anticipadamente el precio del azúcar aplicable en España al precio común, concede ayudas a los productores de remolacha y de caña de azúcar y a los productores de azúcar para el azúcar almacenado y autoriza a España a conceder una ayuda de adaptación a las empresas productoras de azúcar, no genera la responsabilidad de la Comunidad respecto de los productores españoles de isoglucosa, para quienes su adopción no ha constituido una violación del principio de confianza legítima, ni del de no discriminación enunciado en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 40 del Tratado.

En efecto, por una parte, se deduce, en primer lugar, de una interpretación de las letras a) y b) del apartado 3 del artículo 70 del Acta de Adhesión de España que las demandantes no han podido, con arreglo a esta última, confiar legítimamente en que la aproximación de los precios entre los precios españoles y los precios comunes en el sector del azúcar se prolongase

durante un período posterior a la entrada en vigor del Reglamento impugnado. En segundo lugar, el Reglamento n° 1716/91, que dispone una aproximación de los precios en dos etapas hasta 1995, tampoco ha podido inducir en los productores una confianza legítima, habida cuenta, en cuanto a la primera etapa, del objetivo de realización del mercado único el 1 de enero de 1993, que el Acta Unica Europea asignó al legislador comunitario, cuya naturaleza permitía prever a un operador económico prudente e informado una aceleración de la aproximación de los precios y, en cuanto a la segunda etapa, del hecho de que del artículo 7 de dicho Reglamento se deduce que las condiciones de aproximación para este último período no fueron fijadas cuando se adoptó, al haberse previsto la determinación de estas condiciones en una fecha posterior.

Por otra parte, el hecho de que el Reglamento no establezca en favor de los productores españoles de isoglucosa unas medidas transitorias destinadas a permitirles enfrentarse a la situación creada por el ajuste anticipado de los precios, siendo así que las prevé, en particular en forma de ayudas, para los productores de azúcar, no constituye una discriminación en favor de los primeros, al encontrarse unos y otros, especialmente en cuanto a las condiciones de abastecimiento de materias primas y de producción, en situaciones objetivamente diferentes.